

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO
DEMANDADO : COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PROFESIONAL DE ANTIOQUIA -COOPEVIAN C.T.A
TIPO DE PROCESO : EJECUTIVO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-022-2021-00205-01
RADICADO INTERNO : 115-23
DECISIÓN : REVOCA Y CONFIRMA AUTO
ACTA NÚMERO : 138

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el recurso dentro del proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte ejecutante presenta escrito mediante el cual solicita se libre mandamiento de pago en contra de la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Profesional de Antioquia -COOPEVIAN C.T.A por los siguientes conceptos:

- Por el valor de **\$8.075.888**, por concepto de aportes sociales retenidos al señor LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO de sus compensaciones ordinarias, y por **los intereses moratorios** a la tasa máxima legal o la tasa de interés establecida por el Consejo de Administración de COOPEVIAN, de la anterior suma de acuerdo con lo consagrado en el artículo 25 de los Estatutos vigentes a 2019, o en subsidio la indexación.

- Por el valor de **\$1.337.647**, por concepto de cuotas ordinarias de administración, las cuales fueron retenidas al señor LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO de sus compensaciones ordinarias, y **por los intereses moratorios** a la tasa máxima legal o la tasa de interés establecida por el Consejo de Administración de COOPEVIAN, de la anterior suma de acuerdo con lo consagrado en el artículo 25 de los Estatutos vigentes a 2019, o en subsidio la indexación
- Por el valor de \$1.987.330, por concepto de cuotas adicionales de administración, las cuales fueron retenidas al señor LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO de sus compensaciones ordinarias, más los **intereses moratorios** a la tasa máxima legal o la tasa de interés establecida por el Consejo de Administración de COOPEVIAN, de la anterior suma de acuerdo con lo consagrado en el artículo 25 de los Estatutos vigentes a 2019, o en subsidio la indexación.
- Por el valor de \$2.726.533, por concepto de deducciones al fondo de incapacidad, las cuales le fueron retenidas al señor LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO de sus compensaciones, mas los **intereses moratorios** a la tasa máxima legal o la tasa de interés establecida por el Consejo de Administración de COOPEVIAN, de la anterior suma de acuerdo con lo consagrado en el artículo 25 de los Estatutos vigentes a 2019, o en subsidio la indexación.
- Por el valor de \$8.613.357, por concepto de indexación de las compensaciones ordinarias causadas desde el 28 de diciembre de 2012 y hasta el 30 de agosto de 2019, las cuales fueron canceladas por COOPEVIAN en noviembre de 2019.
- Por el valor de \$1.612.338, por concepto de indexación de los beneficios sociales cooperativos causados desde el 28 de diciembre de 2012 y hasta el 30 de agosto de 2019, las cuales fueron canceladas por COOPEVIAN en noviembre de 2019.
- Por las costas procesales causadas dentro del presente proceso ejecutivo.

Ante lo anterior, el juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 26 de agosto de 2022, negó la solicitud de mandamiento de pago al considerar que las sentencias del proceso ordinario con radicado 2016-00364 no constituían un título expreso para reclamar ejecutivamente lo pretendido.

RECURSO DE APELACION.

Inconforme con la decisión anterior el apoderado de la parte ejecutante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación manifestando en síntesis que no es cierto que lo pretendido en la demanda ejecutiva no sea claro, por no hacer referencia en que lo solicitado haya sido ordenado en las sentencias del proceso ordinario, pues indica que en la sentencia de primera instancia proferida el 25 de febrero de 2019 se declaró que carecía de todo efecto jurídico la exclusión del actor de la cooperativa Coopevian, por tanto, ordenó restablecer su condición como asociado, y que como consecuencia de lo anterior, se ordenó el pago de las compensaciones ordinarias para vigilantes causadas durante todo el tiempo de desvinculación.

Que además se ordenó el pago de las compensaciones semestrales, los descansos anuales compensados, las bonificaciones por descanso anual y los excedentes anuales que se hubieren distribuido. Estos pagos los ordenó desde el 28 de diciembre de 2012, fecha de exclusión del demandante, y hasta la fecha de su reintegro o reinstalación definitiva.

Que así mismo el despacho ordenó la indexación de todas las sumas de dinero que se debían pagar en favor del actor, desde la fecha de causación de cada concepto y hasta el pago efectivo, providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Medellín.

Que el actor manifestó que no quería reingresar a dicha Cooperativa, por tanto, la misma liquidó los conceptos que debía pagarle según las sentencias referidas hasta el 30 de agosto de 2019.

En virtud de lo anterior, y tal como se ilustró en la demanda ejecutiva y con las pruebas allegadas especialmente la liquidación de las condenas, la Cooperativa debía pagar al actor lo siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Compensaciones ordinarias	61.363.851
Beneficios sociales:	
Descanso Anual Compensado	3.418.521
Recon. Ecco. Descanso Anual	2.588.912
Fondo Descanso Anual	240.105
Bonificación Semestral Junio	3.418.522
Bonificación Semestral Dicbre.	2.768.522
Total beneficios sociales	12.434.582
TOTAL SIN INDEXACION Y SIN APLICAR DESCUENTOS EN SALUD.	73.798.433

Que los anteriores conceptos, sin perjuicio de la indexación. A noviembre de 2019, mes en que la entidad pagó parcialmente las condenas la indexación de las compensaciones ascendía a la suma de \$8.613.357. La indexación de los beneficios sociales cooperativos era de \$1.612.338. Y, sin perjuicio de los descuentos en salud que ascendieron a un total de \$4.961.538, y que por lo tanto la cooperativa debería haber pagado un total de:

CONCEPTO	VALOR
Compensaciones ordinarias	61.363.851
Beneficios sociales	12.434.582
Indexación Compensaciones ordinarias	8.613.357
Indexación Beneficios sociales	1.612.338
Descuentos salud (menos)	4.961.538
TOTAL FINAL A PAGAR	84.024.127

Que pese lo anterior, la Cooperativa **no pagó** este total \$84.024.127, por cuanto realizó una serie de deducciones y retenciones que no debía hacer por valor de \$14.127.398 (Excepto los aportes al sistema de seguridad social por \$4.961.538), ya que, en las sentencias del proceso ordinario no se le ordenó ni autorizó para efectuar las mismas.

Que la Cooperativa supuestamente amparada en lo establecido en sus estatutos y regímenes, dedujo y retuvo lo siguiente:

DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
Salud	2.480.769
Pensión	2.480.769
Fondo de Incapacidad	2.726.533
Administración	1.337.647
Administración Adicional	1.987.330
Aportes Sociales	8.075.888
TOTAL DEDUCIDO Y RETENIDO SIN CONTAR APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL	14.127.398

Que el Despacho manifestó que dentro del trámite ordinario la Cooperativa constituyó dos títulos números 413230003447073 y 413230003482425 por valor de \$57'518.804 y \$12'822.116 respectivamente, los cuales ya fueron reclamados, no obstante indica el recurrente que, de conformidad con lo detallado en la demanda ejecutiva, estos títulos NO CUBRIERON el total de las obligaciones impuestas en el proceso ordinario, por lo que insiste en que la cooperativa no tenía facultad alguna para efectuar las deducciones y retenciones por valor de \$14.127.398, y además porque **no pagó** la indexación de las compensaciones ordinarias por la suma de \$8.613.357, ni la indexación de los beneficios sociales por valor de \$1.612.338, y que por lo tanto se le adeuda un total de \$24.353.093.

Por ultimo indica que contrario a lo argumentado por el juzgado, es evidente las obligaciones para la Cooperativa según lo ordenado en las sentencias del proceso ordinario, si se ordenó la indexación de las compensaciones ordinarias y los beneficios sociales, precisando además que sobre las deducciones y retenciones efectuadas por la Cooperativa, la sentencias NO LAS ORDENARON, NI AUTORIZARON, es decir, de la literalidad de la sentencia se desprende que a la Cooperativa no se le facultó para hacer tales descuentos. Por lo anterior solicita se libre mandamiento de pago en los términos solicitados en la demanda ejecutiva.

En virtud de lo anterior, el juzgado mediante auto del 12 de octubre de 2022 negó el recurso de reposición interpuesto y en su lugar concedió el de apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSION

No se presentaron alegatos de conclusión.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Para resolver, es de resaltar que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los Artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Artículos 65 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más en la primera instancia.

Se centra el problema jurídico en esta instancia en determinar si hay lugar a librar mandamiento de pago en contra de Coopevian, según lo dispuesto en las sentencias del proceso ordinario con radicado 2016-00364.

Por lo anterior se resolverá el problema jurídico en el siguiente orden:

De los requisitos del título ejecutivo, y la indexación de las mesadas pensionales.

Al respecto establece el artículo 100 del C.S.T con relación a la procedencia de la ejecución lo siguiente:

*“ARTICULO 100. PROCEDENCIA DE LA EJECUCION. **Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación** originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o **que emane de una decisión judicial o arbitral firme.***

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso”. (subraya de la Sala).

En el mismo sentido el artículo 422 del C.G.P establece con respecto al título ejecutivo lo siguiente:

*“Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de **una sentencia de condena proferida por juez** o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley (...).” (subraya de la Sala)*

Y el artículo 306 del C.G.P respecto a la ejecución de sentencias establece lo siguiente:

*“ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, **el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada.** Formulada la solicitud el juez librára mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea*

necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior..”.

Partiendo de lo anterior debe tenerse en cuenta que según lo dispuesto en el artículo 278 del C.G.P puede emitir autos y sentencias. Particularmente en lo que se refiere a las sentencias y el contenido de las mismas el artículo 280 ibidem expresa:

“ARTÍCULO 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la sentencia deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de ella.

La parte resolutive** se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; **deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su contestación”.

Ahora, con respecto a los requisitos del título ejecutivo, se hará un breve apunte respecto del contenido semántico que le es propio a cada uno de estos términos:

*a. **Que la obligación sea clara:** consiste en que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (obligación real o personal), como sus sujetos (acreedor y deudor), además de la descripción de la manera como se ha de llevar a cabo la prestación (plazo o condición), presupuesto sin el cual no sería posible determinar con la certeza requerida el momento de su exigibilidad y la verificación de un eventual incumplimiento.*

*b. **Que la obligación sea expresa:** quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patentada en el documento ejecutivo. Esta determinación, por tanto, solamente es posible hacerse por escrito. En otras palabras, este requisito se cumple cuando los elementos constitutivos de una obligación que se pueda llamar clara se hacen constar por escrito en un instrumento que servirá de prueba inequívoca de la existencia de una obligación.*

*c. **Que la obligación sea exigible:** Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o, que, habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido ésta, sea por mandato legal o por acuerdo entre las partes contractuales. (Juan Guillermo Velásquez “De los procesos ejecutivos”).*

Partiendo de todo lo descrito debe observarse que fue lo que se ordenó en las sentencias del proceso ordinario del cual ahora se pretende la ejecución.

En sentencia del 25 de febrero de 2019, el Juzgado Veintidós laboral del Circuito de Medellín, dispuso lo siguiente:

DECLARA: que carece de todo efecto jurídico la exclusión de Luis Enrique Gonzales Osorio, como asociado de COOPEVIAN C.T.A.

CONDENA a COOPEVIAN C.T.A a restablecer la condición de asociado y reconocerle y pagarle las compensaciones ordinarias para vigilantes del literal a) del artículo 33 del régimen de trabajo asociado; los descansos anuales; bonificaciones, compensaciones semestrales; y las distribuciones de excedentes anuales que se hayan presentado, causados entre la fecha de la exclusión (28 diciembre 2012) y la del restablecimiento efectivo del asociado a la cooperativa, sin solución de continuidad esto teniendo en cuenta como valor mensual de las compensaciones ordinarias la suma de \$656.428 pesos, promedio mensual percibido por el actor en el año 2012 por su actividad como vigilante cooperado. Sumas que deberán pagar indexadas desde la fecha de causación hasta el pago efectivo.

DECLARA no probadas las excepciones de fondo propuestas, y se **CONDENA** en costas a la parte demandada.

Posteriormente ante los recursos de apelación interpuestos esta Sala mediante providencia del 23 de julio de 2019 dispuso lo siguiente:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado veintidós Laboral del Circuito de Medellín, pero declarando la inexistencia del acta del consejo de administración que debía declarar la exclusión del demandante de la cooperativa COOPEVIAN CTA, careciendo de todo efecto jurídico la misma, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por no salir avante ninguno de los recursos interpuestos.

De lo anterior es claro para la Sala que la orden dispuesta en el proceso ordinario lo fue para que COOPEVIAN C.T.A procediera a restablecer la condición de asociado y pagarle las compensaciones ordinarias para vigilantes previstas en el literal a) del artículo 33 del régimen de trabajo asociado, esto es, los descansos anuales; bonificaciones, compensaciones semestrales; y las distribuciones de excedentes anuales que se hayan presentado, causados entre la fecha de la exclusión, 28 diciembre 2012, y la del restablecimiento efectivo del asociado a la cooperativa, teniendo en cuenta como valor mensual de las compensaciones ordinarias la suma de \$656.428 pesos.

A pesar de lo anterior y de existir unos pagos por parte de Coopevian al señor LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO por valor de \$57'518.804 y \$12'822.116, la parte accionante indica que al momento del pago se le hicieron unas deducciones o descuentos no autorizados en la sentencia del proceso ordinario por valor de \$14.127.398, correspondientes a descuentos por Salud, pensión, fondo de incapacidad, administración, administración adicional y aportes sociales, por lo que se debe librar mandamiento de pago por dicha sumas.

No obstante lo solicitado debe precisar la Sala que en las sentencias del proceso ordinario no existía la obligación de indicar expresamente cuales sumas podía deducir Coopevian al momento de realizar los pagos respectivos de las compensaciones ordinarias para vigilantes previstas en el literal a) del artículo 33 del régimen de trabajo asociado, pues dichas deducciones son ordenadas por ley y por el régimen de trabajo asociado, al cual se afilió, el cual establece que deducciones deben de realizarse a todos sus miembros, sin que fuera de esta forma necesario que lo dijera la sentencia para que la entidad pudiera realizar dichos descuentos.

En virtud de lo anterior considera la Sala que las sentencias del proceso ordinario no constituyen un título ejecutivo, claro, expreso, ni exigible que faculte a la parte actora para reclamar a través de la vía ejecutiva las sumas antes mencionadas, debiendo de esta forma CONFIRMARSE la providencia de primera instancia en este punto en particular, pero por las razones argumentadas en la parte motiva de esta providencia.

A pesar de lo anterior, no sucede lo mismo respecto de las sumas solicitadas por la parte ejecutante respecto a la indexación de las compensaciones ordinarias y de los beneficios sociales, pues es claro que en la sentencia base de ejecución se dispuso que las sumas sobre las cuales se ordenó su pago deberían de ser indexadas desde la fecha de causación hasta el pago efectivo.

En virtud de lo anterior la providencia de primera instancia deberá de ser REVOCADA parcialmente para en su lugar LIBRAR mandamiento de pago en favor del señor LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO y en contra de COOPEVIAN, por la indexación de las compensaciones ordinarias y de los

beneficios sociales, desde la fecha de su causación hasta el pago efectivo de dichas sumas.

Sin costas en esta instancia por la forma en que se resuelve el recurso de apelación.

EL FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, el auto del 26 de agosto de 2022, mediante el cual el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín negó librar mandamiento de pago, para en su lugar, LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor del señor LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ OSORIO y en contra de la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Profesional de Antioquia - COOPEVIAN C.T.A, por la indexación de las compensaciones ordinarias y de los beneficios sociales ordenados en la sentencia del proceso ordinario con radicado 05-001-31-05-022-2016-00364-01, desde la fecha de su causación hasta el pago efectivo de dichas sumas, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el auto emitido por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, pero según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Déjese copia de lo resuelto en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo.

QUINTO: Lo resuelto se notifica en ESTADOS.

Los Magistrados,



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 091 del 30 de mayo
de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>